



SIMÓN BOLÍVAR

Analytic

Mayo - Junio 2010

Número 15

DEPRESIÓN ECONÓMICA
Y CONFLICTO BILATERAL

ANÁLISIS ECONÓMICO

LA MALDICIÓN DE CASANDRA: ARGUMENTOS ECONÓMICOS Y ELECCIONES POLÍTICAS EN LA VENEZUELA DE CHÁVEZ

Ronald Balza Guanipa

MAGISTER SCIENTIARUM EN TEORÍA ECONÓMICA - PROFESOR INVESTIGADOR DEL INSTITUTO
DE INVESTIGACIONES SOCIALES DE LA UCAB

14

A evaluar los primeros años del gobierno de Chávez varios economistas criticaron la aplicación de políticas que, utilizadas por otros gobiernos, precedieron el grave deterioro de la economía venezolana durante los años 80 (Guerra, 2004; 2006). Tales críticas, advertencias de un futuro peor, no tuvieron impacto masivo en las contiendas electorales posteriores. En este texto se adopta el enfoque de Quattrone y Tversky (1988) para sugerir una razón: los electores podrían preferir reelegir gobernantes –o partidos– cuando consideran buenas las condiciones económicas, y cambiarlos cuando las consideran malas. Si en la percepción de riesgo de la mayoría pesan más las condiciones económicas presentes –y vividas en años recientes– que la anticipación razonada del futuro, los resultados electorales podrían ser independientes de los argumentos económicos.

Venezuela en el petróleo

La vulnerabilidad de la economía venezolana, dependiente de un ingreso

petrolero volátil y arbitrariamente administrado por el Poder Ejecutivo, ha sido tema recurrente durante más de siete décadas. A las primeras –y contradictorias– advertencias de Adriani, Uslar, Betancourt y Pérez Alfonzo siguieron estudios con variadas perspectivas, preocupados por el origen y el destino de dicho ingreso, en ocasiones diametralmente opuestos a las políticas adoptadas por los gobiernos de turno (Baptista y Mommer, 1992).

El uso del petróleo permitió mejorar sustancialmente la esperanza de vida, el nivel de ingresos, la educación, la urbanización y la infraestructura del país, comparado con su estado en 1936. Sin embargo, la advertida fragilidad de la economía se exacerbó a partir de 1973. Al período de bonanza petrolera vivido entre 1973 y 1982 siguieron quince difíciles años, que incluyeron devaluaciones, inflación, desempleo, desinversión, desabastecimiento, deterioro de los servicios públicos, inseguridad personal y, en los peores momentos, saqueos, golpes de Estado

y crisis bancarias. No pocos explicaron lo sucedido como consecuencia del gasto de enormes cantidades de dinero en la construcción de un sistema inviable. Sostenido con dinero proveniente de la venta del petróleo y del endeudamiento externo, el sistema creaba la dependencia de unos ingresos con cuyo flujo regular no podía contarse. Al reducirse se haría evidente —para muchos economistas— que no había alternativas que rápidamente germinaran, capaces de sostener la calidad de vida alcanzada durante años de abundancia (Balza, 1999).

Aunque los peligros de la dependencia del petróleo aun son un lugar común entre economistas y algunos políticos, a fines de la década de los 80 sus advertencias no habían alcanzado de modo determinante ni a todos los políticos ni a la mayoría de los electores. Más que sobre las consecuencias económicas de la dependencia, el discurso político más influyente se fundaba en la denuncia de la corrupción de los gobernantes. Había quienes entendían estos problemas como complementarios, como se lee en trabajos de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado. En ellos se reconocía que la dependencia del petróleo y la centralización del poder político creaban las condiciones para incrementar y empeorar pobreza y desigualdad, por un lado, y por otro, para agravar corrupción y despilfarro. Sin embargo, los acontecimientos de 1989, año crítico en nuestra historia,

fragmentaron severamente los espacios de estudio, opinión y debate político (López, 2006).

La Gran Venezuela y el Gran Viraje

En 1988 Carlos Andrés Pérez ganó las elecciones presidenciales con el 52,89% de los votos. Ya las había ganado con el 48,7% en 1973, a las puertas de un extraordinario *boom* petrolero. El balance que hizo la mayoría de su pretensión de construir la Gran Venezuela fue favorable, si se tiene en cuenta su segundo triunfo electoral. Y, sin embargo, sobre sus aspiraciones pesaban acusaciones de corrupción contra él y contra miembros de su partido, incluido el Presidente Lusinchi, quien gobernó entre 1984 y 1988. También habría podido perjudicarle la década de crisis económica que siguió a su primer gobierno, nunca vista durante el período democrático, y que muchos atribuyeron a su costoso programa de control de “las alturas dirigentes de la economía” por parte del Estado (Palma, 1985). Aunque la abstención alcanzó el 18,1% del registro electoral —superando con creces la de 1973, cuantificada en 3,48%—, el apoyo recibido por Pérez en las elecciones de 1988 fue claramente contundente.

A diferencia de lo que una significativa porción de sus electores —y de los votantes en general— podía esperar, en 1989 Pérez anunció un Gran Viraje: la reducción de la presencia del Estado en la economía. Para ello eliminaría controles de precios, disminuiría la protección a las empresas nacionales

y privatizaría empresas públicas con problemas, entre otras cosas. Aunque no pocos economistas compartían el objetivo general, si discutían el modo de llevarlo adelante y al alcance de las regulaciones necesarias. Los desacuerdos probaron ser mayores con el electorado.

Varios errores se cometieron en los primeros días de gobierno, que limitaron gravemente la comunicación entre Pérez y sus electores: una toma de posesión recargada de lujos, la clara contradicción en sus discursos como candidato y como presidente y el anuncio del incremento del precio de la gasolina poco antes del pago quincenal a los trabajadores, en medio de una huelga de la policía. Los errores ocurrieron en un contexto muy desfavorable. Por un lado, el pasado de corrupción atribuido directamente a Pérez y a su partido saltó al primer plano. Por otro, desde el punto de vista de buena parte de los electores, la compleja argumentación de los economistas en el gobierno sólo pretendía favorecer a los ricos a costa de los pobres; y por último, la inesperada ocurrencia del Caracazo —tres días de saqueo y represión sufridos entre el 27 y el 29 de febrero de 1989 y transmitidos en vivo por la televisión— manchó de sangre al gobierno de Pérez desde sus primeros días.

Los argumentos de los economistas en el gobierno quedaron ensombrecidos por las denuncias de corrupción, impunidad y represión, y por acusaciones de subordinación al Fondo

Monetario Internacional y a grandes intereses privados (Naím, 1993). Muchos justificaron los golpes de estado de 1992, entonces y después, como una respuesta a la corrupción y al “neoliberalismo”, amplia e imprecisa etiqueta que arrojaba luego a todo aquel que recomendase reducir la intervención en la economía del Estado venezolano, por hipertrofiado, despilfarrador e incentivador de la corrupción que fuese. Por paradójico que pudiera parecer, la crítica a los partidos políticos —que gobernaron desde 1973 en medio de sonoros casos de corrupción, derroche y desajustes— desprestigió los argumentos económicos que habían diagnosticado algunos de sus peores errores.

Golpe y socialismo

Hugo Chávez, cabeza visible del primer golpe de 1992, llegó al poder en las elecciones presidenciales de 1998 con un 56,2% de los votos y una abstención de 36,54%. Más de diez años después, en un discutido referéndum convocado para enmendar la Constitución y permitir al Presidente la reelección continua, Chávez pudo atraer al 54,85% de los votantes en una elección con 29,67% de abstención. De los procesos electorales realizados durante más de una década han sido pocos los que no favorecieron la opción apoyada por él. Su derrota más significativa, el rechazo a la creación de un Estado socialista por medio de la reforma constitucional propuesta en 2007, recibió el nada despreciable apoyo de 49,29% de los votantes,

registrándose una abstención del 44,11%.

No han sido años fáciles. Muchos argumentos a favor y en contra del gobierno se han expuesto desde 1999, llegando las tensiones a explotar con el golpe de abril de 2002 y el paro petrolero de diciembre de ese año y enero del siguiente. A principios de 2005, tras dos años de ingresos petroleros –y gastos– crecientes, el Presidente se declaró socialista. Nuevos temas entraron a debate desde 2007, cuando el tipo de influencia recibida de Mao y el Che Guevara sobre Chávez se hizo evidente. Sin embargo, y a pesar de que algunas objeciones a su gobierno eran las mismas hechas por décadas a los gobiernos que se amarraron a los ingresos petroleros, el Presidente Chávez mantenía amplio apoyo del electorado en 2009. La pérdida de autonomía del Banco Central de Venezuela, el abandono del Fondo de Estabilización Macroeconómica y la creación del Fondo de Desarrollo Nacional pudieron parecer problemas insignificantes a la mayoría de los votantes. Por el contrario, pudo parecerle cansonamente “neoliberal” la insistencia en controlar el gasto público, acusado de causar inflación, apreciar el tipo de cambio, destruir oportunidades de producción de bienes transables y estimular empleos que sólo podrían sostenerse con petróleo. Contando con precios petroleros crecientes entre 2003 y 2008, el gobierno respondió a los argumentos de los economistas exhibiendo mejoras

en las cifras de pobreza, distribución del ingreso, PIB e IDH. Al menos hasta 2008, porque en 2009 cayó el PIB (con el precio del petróleo y la radicalización de la revolución).

Limitaciones cognitivas y condiciones económicas

Asociar mayor gasto público y controles de precios con mejores oportunidades individuales (de un sector de la población) pudo ser determinante en el regreso de Pérez al poder en 1989. Tal asociación también pudo explicar la conservación y acrecentamiento del poder de Hugo Chávez desde 2004 –un quinquenio después de llegar a la Presidencia por vía electoral–, cuando fue sometido a referéndum revocatorio. Esta afirmación, extraordinariamente simple, sugiere también que la pérdida del poder estaría relacionada con el deterioro de las oportunidades individuales, vinculadas con reducciones del gasto y la eliminación de los controles de precios. La súbita pérdida de apoyo que sufrió Pérez en 1989, a pocos días de iniciar su segundo período, ilustra el punto. Estas ideas son compatibles con una observación de Quattrone y Tversky, también muy simple: “los presidentes a cargo y los candidatos al congreso del mismo partido se benefician cuando las condiciones económicas mejoran, y sufren cuando se deterioran”. Para explicarla recurren a la siguiente hipótesis: “si la personas son aversas al riesgo para ganancias y buscadoras de riesgo para las pérdidas, al titular [o político a cargo] debería irle mejor

cuando las condiciones son buenas que cuando son malas”. Esto porque a dichos políticos los votantes “usualmente [les consideran] como menos riesgosos que los retadores, a veces desconocidos cuyas políticas podrían alterar drásticamente las tendencias actuales, para mejor o para peor”. Al respecto ambos insisten en resaltar que “el retador es *más riesgoso* que el titular, no necesariamente mejor”. (1988:724).

Este enfoque es deudor de la línea de investigación que fue reconocida con el premio Nobel en Economía de 2002¹. Aunque Quattrone y Tversky recuerdan la tendencia a suponer que “el animal humano... a veces [es] controlado por emociones y deseos que no calzan con el modelo de racionalidad calculadora”, prefieren objeciones “cognitivas más que motivacionales” a la “doctrina de maximización” (1988:719).

Esta perspectiva es interesante para contar la historia de nuestros últimos cuarenta años. Pudo Pérez volver a la Presidencia en 1989 sobre el recuerdo de su primer gobierno, cuando las “condiciones económicas” eran percibidas como buenas por los electores. Aunque parte significativa de las tensiones que se potenciaron entre

ambos gobiernos se debieran al manejo imprudente del ingreso petrolero y el endeudamiento público, los votantes quisieron ver en Pérez al continuador de los buenos tiempos, al político menos riesgoso. Luego de una década de explicaciones sobre los males causados por la excesiva intervención del Estado —una frase donde “excesiva” puede entenderse de distintas maneras— la visión de Pérez sobre el buen gobierno pareció cambiar mucho más que la de sus electores. Las políticas que anunció en 1989 pudieron percibirse como las más dolorosas en una década de dificultades, más como la culminación de un fracaso que como el comienzo de una recuperación. Con ello se abrió la puerta al retador: aunque “*más riesgoso* que el titular, no necesariamente mejor”.

El retador fue Chávez. Golpista y desconocido en 1992, Presidente electo en 1998. Montado sobre el rechazo a las dos décadas pasadas y aprovechando crecientes ingresos petroleros, Chávez pudo recurrir a las emociones y a algo más: a las condiciones económicas de muchos electores que efectivamente mejoraron durante su gobierno. Que los economistas advirtieran la fragilidad creciente de la economía, comparable con la engendrada durante el primer gobierno de Pérez, sería irrelevante para ellos, aun peor, inconveniente. Que el PIB pudiese caer con el precio del petróleo —como muchos economistas advirtieron durante más de cinco años de precios crecientes— no pasaría de ser una condición temporal, atribuible a causas externas y para las que no

¹ Daniel Kahneman recibió el Nobel en 2002 por trabajos realizados con Amos Tversky (quien murió en 1996) entre 1971 y 1986. Estudiaron “la psicología de las creencias intuitivas” en un marco de racionalidad limitada, destacando como temas de estudio “las heurísticas de juicio, la elección en situaciones de riesgo y los efectos de marco o encuadramiento (*framing effects*)” [Kahneman (2002:449)].

habría defensa posible -a pesar de lo que recomendaran los economistas-. Que los economistas señalaran al gasto público como causa de inflación sería menos sugerente que culpar de especuladores a comerciantes y productores. Que los opositores rechazaran el proyecto socialista en los términos expuestos en la propuesta constitucional de 2007 –por sus alcances totalitarios y sus restricciones a la propiedad– y que muchos abogados calificaran leyes posteriores como inconstitucionales también les parecería irrelevante. Que el Presidente fuese autoritario, dando claras demostraciones de dirigir a los demás poderes públicos en contra de sus adversarios, no pasaría de ser una necesaria demostración de su poder. Que la comida importada se pudriera en los puertos, caso estruendoso de corrupción y despilfarro, no pasaría para muchos de ser un delito cometido por oportunistas de bajo rango, ocurrido en medio de un proyecto que, tal como lo entienden, les favorece.

Nota final

Dentro de la percepción de riesgo de muchos votantes no parece jugar un papel relevante el peligro implícito en la concentración del poder en un individuo. Entre las diversas razones a considerar, en este texto adoptamos la perspectiva de Quattrone y Tversky y, abusando un poco, la llevamos más lejos: advertencias sobre el deterioro *futuro* de las condiciones económicas

como consecuencia de las políticas del gobierno pudieran pesar menos sobre la percepción de riesgo que el estado de las condiciones económicas *actuales*. Sobre ello no influyen únicamente las diferencias conceptuales entre economistas de distintas tendencias: puede ser determinante la manipulación política de sus argumentos más elementales. Tal como apuntan Quattrone y Tversky (1988:729-730), “la decisión de cómo encuadrar los datos puede tener consecuencias políticas significativas tanto para los individuos como para grupos sociales enteros. Sospechamos que los más exitosos en el arte de la persuasión emplean comúnmente los efectos encuadramiento en su ventaja personal” (1988:724).

En Venezuela pareciera que la crítica a las políticas del gobierno no mejoró hasta 2009 el “valor esperado” de ningún retador, entonces “sustancialmente menor al del titular” para la mayoría de los electores. Por ello era siempre era “improbable que [fuese] electo [el retador] aun en presencia de sustancial búsqueda de riesgo”. Sin embargo, la materialización del deterioro advertido en las condiciones económicas podría reducir el valor esperado del titular. Incluso incrementar el de un retador, “*más riesgoso* que el titular, no necesariamente mejor”. Esperemos, para nuestro bien, que sea mejor. Al menos que entienda las relaciones entre presente y futuro y que pueda hacer ver al electorado que tenerlas en cuenta es indispensable.

Referencias bibliográficas

- Balza, R. (1999) *Sorpresas monetarias en Venezuela: 1968-1996. Temas de Coyuntura*, IIES-UCAB, junio, N° 39, págs 131-185.
- Baptista, A. y B. Mommer (1992) *El Petróleo en el pensamiento económico venezolano: un ensayo, 2 ed.*; prólogo de A. Uslar, IESA, Caracas.
- Guerra, J. (2004) *La política económica en Venezuela 1999-2003*, UCV, Caracas.
- _____ (2006) *Venezuela endeudada*, De la A a la Z Editores, Caracas.
- Kahneman, D. (2002) "Maps of bounded rationality: A perspective on intuitive judgment and choice"
Nobel Prize Lecture, Princeton University, Department of Psychology, 41 pp. [Disponible en www.nobel.se/economics/laureates/2002/kahnemann-lecture.pdf]
- López, M.(2006) *Del Viernes Negro al Referendo Revocatorio*, Alfadil, Caracas.
- Naím, M. (1993) *Paper Tigers and Minotaurs: The Politics of Venezuela's Economic Reforms*, Carnegie Endowment for International Peace Washington, DC.
- Palma, P. (1985) *La economía venezolana en el período 1974-1983. De la bonanza al estancamiento y la crisis*, ANCE (Serie Cuadernos 11), Caracas.
- Quattrone, G.A. y A. Tversky (1988): "Contrasting rational and psychological analyses of political choice" en *American Political Science Review*, Vol. 82, 719-736.